Santiago, doce de abril de dos mil siete.

VISTOS:

Con fecha 27 de noviembre de 2006, en representación de don Fernando Francisco Pizarro Aguilar, se ha formulado a este Tribunal una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación al artículo 11 de la Ley N° 19.806, respecto de la causa RIT N° 77-2006 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El requirente señala que en el juicio oral penal no se contemplan medios de impugnación respecto de la resolución relativa a los beneficios de la Ley N° 18.216, cuerpo legal que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En efecto, el artículo 11 de la Ley N° 19.806, al modificar el artículo 25 de la Ley N° 18.216, eliminó la posibilidad de impugnación de tal tipo de decisión por la vía del recurso de apelación.

La norma impugnada, en lo que importa a esta acción, señala:

ARTICULO 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

Artículo 25.

Sustitúyese por el siguiente:

"Artículo 25.- La decisión revocatoria de los beneficios que establece esta ley será apelable ante el tribunal de alzada respectivo."

Precisa el autor que este artículo entra en colisión con la Constitución Política de la República, específicamente con su artículo 19 N° 3, inciso quinto, y

con los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

Resume, en tal sentido, el requirente la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto de los beneficios alternativos al cumplimiento de la condena, señalando que los que contempla la Ley N° 18.216 no forman parte de la sentencia definitiva del proceso penal, cuyo fin es determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.

Sobre la base del criterio sustentado en la aludida jurisprudencia, si bien los temas relativos a beneficios alternativos materialmente se consignan en la sentencia condenatoria, la resolución que sobre ellos recae no participa del carácter de sentencia definitiva, ya que no decide el asunto objeto del pleito, sino que sólo determina un aspecto adjetivo del mismo. Sin embargo, tal aseveración no concuerda con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 348 del Código Procesal Penal, precepto que, al referirse a la sentencia condenatoria, indica que ésta "fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley."

El efecto práctico que ha tenido la aplicación del referido predicamento jurisprudencial se ha traducido en negarle al condenado la posibilidad de impugnar la parte de la sentencia alusiva a la negación de las medidas alternativas ya no sólo por medio del recurso de apelación, que fue abolido por la norma legal cuya constitucionalidad se impugna en estos autos, sino también por medio del recurso de nulidad que en contra de la sentencia definitiva del juicio oral en lo penal establece el Código del ramo en el Título IV de su Libro III.

Señala el actor que al no permitirse recurrir de apelación de la no concesión de un beneficio de la Ley N° 18.216, se desconoce el derecho constitucional del imputado a obtener la revisión del fallo por un juez o tribunal superior. Por tanto, se violenta el artículo 19 N° 3°, inciso quinto, de la Carta Fundamental en relación con el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las razones para impugnar las resoluciones judiciales radican en la posibilidad de que a través de ellas se haya incurrido en un error que ocasione un agravio, gravamen o perjuicio ilegítimo a una persona. En la especie, se afectaría con lo resuelto la libertad personal del acusado, lo que necesita de un mecanismo de control a fin de evitar un error de apreciación de los antecedentes que se tuvieron en vista para resolver.

Respecto al carácter decisivo de la norma que se objeta, indica el requirente que se ha impugnado ante la Corte la aplicación concreta que hizo el Tribunal Oral de la Ley N° 18.216. Así, de ser inconstitucional el precepto que suprimió el recurso de apelación, su no aplicación permitiría obtener la revisión de esa decisión por un tribunal superior. Es decir, al no aplicarse la modificación legal del artículo 25 de la Ley N° 18.216, resurgiría la vía de impugnación que hasta ahora el sistema procesal penal tiene vedada.

Con fecha 1° de diciembre de 2006, la Segunda Sala de esta Magistratura declaró admisible el requerimiento, suspendiéndose el procedimiento ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y pasando los autos al Pleno para su sustanciación.

Con fecha 27 de diciembre de 2006, el abogado Sabas Chahuán Sarrás, en representación del Ministerio Público, evacuó el traslado conferido, haciendo previamente una revisión de los antecedentes del requerimiento.

Señaló, en primer lugar, que el requerimiento no cumple con el requisito de que la norma impugnada resulte decisiva en la resolución del asunto.

Indicó, en tal sentido, que ni en el proceso RIT N° 77 del Tribunal Oral en lo Penal de Calama, ni en el recurso de nulidad interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se ha dado aplicación o se ha pretendido aplicar el artículo 11 de la Ley N° 19.806, considerando que se trata de una norma de carácter sustitutivo que se agotó con la modificación que introdujo al artículo 25 de la Ley N° 18.216. Lo que se pretende con esta acción de inaplicabilidad es revivir el antiguo artículo 25 de la Ley N° 18.216.

No existe posibilidad alguna de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta pueda dar aplicación al artículo 11 de la Ley N° 19.806, ya que esa norma se agotó en la modificación de la Ley N° 18.216. Además, la falta de carácter decisivo de esta norma se verifica teniendo en cuenta que si ella no hubiera existido, tampoco habría sido procedente el recurso de apelación respecto de la denegación de los beneficios de la Ley N° 18.216, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 364 del Código Procesal Penal y lo señalado en el artículo 66 de la misma Ley N° 19.806, se derogaron todas las normas procesales penales especiales incompatibles con el Capítulo del Ministerio Público de la Constitución y con las leyes N°s. 19.640, 19.665, 19.708 y el Código Procesal Penal.

Así, expresa el Ministerio Público que aunque no hubiera existido el artículo 11 de la Ley N° 19.806, a partir del 31 de mayo de 2002, fecha en que entraron a regir las normas adecuatorias, igualmente hubiera cesado la facultad de deducir recurso de apelación en contra de la resolución por la que el Tribunal Oral denegó el beneficio de la Ley N° 18.216. Además, será la Corte de Apelaciones de Antofagasta la que deberá determinar si procede pronunciarse sobre la forma en que se aplicó el artículo 15, letra c), de la Ley N° 18.216, que no tiene relación con la citada norma del artículo 11.

Finalmente el Ministerio Público indica que la Ley N° 19.806 fue sometida a control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, el que por fallo de 30 de abril de 2002, Rol N° 349, incluyó al artículo 11 en cuestión entre las normas que son propias de ley orgánica constitucional, declarándola constitucional.

Por lo anterior, no se puede dejar de considerar que el Tribunal Constitucional declaró el artículo 11, en cuanto modificaba el artículo 25 de la Ley N° 18.216, como constitucional y no existen elementos que permitan modificar ese criterio, considerando además lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal, según el cual habiéndose pronunciado éste sobre la constitucionalidad de un precepto, no se admitirá ulteriormente a tramitación ningún requerimiento para resolver cuestiones de constitucionalidad del mismo.

Posteriormente, con fecha 20 de marzo de 2007, la Defensoría Penal Pública hizo presente que la resolución denegatoria de beneficios de la Ley N° 18.216, en la medida que causa agravio en un bien jurídico tan

importante como la libertad personal, requiere estar sujeta a la revisión de un superior jerárquico, puesto que no está exenta de error y en el caso concreto se dan los supuestos básicos que justifican la existencia de medios de impugnación. Sin embargo, el recurso de nulidad no responde a la figura de un recurso efectivo, ya que se considera que no permite revisar la decisión sobre los beneficios.

Posteriormente señala el Defensor que respecto al carácter decisivo del artículo 11 de la Ley N° 19.806 -norma procesal de carácter funcional-, lo que se cuestiona en el recurso de nulidad es la aplicación de los requisitos para conceder la libertad vigilada contenidos en el artículo 15, letra c), de la Ley N° 18.216, por lo que esa misma norma sería la materia impugnada de existir el recurso de apelación.

La norma impugnada es decisiva no porque el tribunal deba mediante su aplicación resolver el caso que se le plantea, sino porque su aplicación impide elegir la vía procesal más adecuada para asegurar los derechos del requirente.

El Defensor señala que de ser acogido el requerimiento ello significará que la norma derogatoria no puede ser aplicada en la causa respectiva, pero la decisión posterior respecto a un eventual resurgimiento de una norma derogada deberá ser tomada por los tribunales ordinarios en base a interpretar los preceptos procesales que quedarán disponibles, concediendo el recurso de apelación por aplicación del criterio de la analogía in bonam partem, permitido en materia penal.

En relación al control de constitucionalidad realizado por el Tribunal Constitucional sobre la norma impugnada, el Defensor indica que ello no interfiere en su pretensión, porque la

normativa constitucional vigente -después de la reforma de 2005- no contiene ninguna norma que limite la presentación de requerimientos de inaplicabilidad, aun cuando el precepto impugnado haya sido declarado previamente constitucional.

Una sentencia del Tribunal Constitucional no impide interponer una nueva acción mediante otra vía procesal, ya que el precepto declarado constitucional por control preventivo puede tener una aplicación específica que resulte inconstitucional.

Finalmente, en el Rol N° 349, el Tribunal Constitucional no formuló expresamente los motivos que lo llevaron a sostener la constitucionalidad de la norma impugnada, por lo cual sólo se está en presencia de cosa juzgada aparente, ya que no se ha examinado efectivamente si la disposición, en confrontación con la Constitución, es o no constitucional.

Se ordenó traer los autos en relación y con fecha 22 de marzo de 2007 se procedió a la vista de la causa oyéndose a los abogados de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 93 N° 6° de la Constitución Política de la República dispone que es atribución de este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa, en su inciso undécimo, que, en este caso, “la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto” y agrega que “corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre

que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley”;

TERCERO: Que, como se ha indicado en la parte expositiva de esta sentencia, en el presente requerimiento se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley N° 19.806, de 31 de mayo de 2002, que establece normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal, en el contexto de la instancia promovida por el señor Fernando Francisco Pizarro Aguilar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que anule la sentencia de primera instancia del Tribunal Oral en lo Penal de Calama que, en la causa RIT N° 77-2006, lo condenó a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa de 11 unidades tributarias mensuales, más penas accesorias, como coautor de ocho delitos de apropiación indebida de dineros, cometidos en contra de diversas personas;

CUARTO: Que el requirente hace consistir la violación constitucional de la que reclama en que el precepto legal impugnado, al modificar el artículo 25 de la Ley N° 18.216 suprimiendo el recurso de apelación en contra de la resolución denegatoria de los beneficios alternativos al cumplimiento de la condena, habría vulnerado la garantía constitucional del debido proceso y los tratados internacionales vigentes en Chile en la materia, que contemplan como un derecho esencial del condenado la posibilidad de recurrir de la sentencia ante un tribunal superior;

QUINTO: Que, para decidir la procedencia de la acción deducida ante este Tribunal, debe examinarse tanto su plausibilidad de fondo como su sujeción a los requisitos formales pertinentes y, por lo tanto, antes de pronunciarse sobre una eventual incompatibilidad entre el precepto legal objetado y la norma constitucional del inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de nuestra Carta Política, que se dice transgredida por aquél, es menester examinar si la pretensión de inaplicabilidad deducida en autos cumple todas las exigencias formales que la Carta precisa para su conocimiento.

Que no obstante haberse pronunciado la Segunda Sala de esta Magistratura a favor de la admisibilidad del requerimiento, un examen del mismo, a la luz de todos los antecedentes presentados y, particularmente, de los vertidos en la vista de la causa, permite colegir que la acción deducida no satisface uno de los requisitos de admisibilidad, cual es que la aplicación de la norma impugnada pueda resultar decisiva en la resolución del asunto pendiente.

En efecto, siendo la cuestión pendiente la tramitación de un recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria que afecta al requirente, la aplicación de la norma legal modificatoria que éste objeta en ningún caso podría tener lugar en la resolución de tal recurso, por no ser norma que incida en la decisión de la cuestión debatida;

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la pérdida de la eficacia normativa del primitivo texto del artículo 25 de la Ley N° 18.216 (que contemplaba, como se ha dicho, la posibilidad de apelar contra la denegación de medidas alternativas) no sólo se produjo con la introducción del precepto modificatorio que el requirente tacha de inconstitucional (el artículo 11 de la Ley N° 19.806),

sino que, incluso antes, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 364 del Código Procesal Penal, que no fue objetado en el requerimiento materia de autos y que expresamente suprimió la apelación contra las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Por lo tanto, ni aun reviviendo hipotéticamente la norma legal modificada por el precepto impugnado, en el supuesto de que la impugnación se acogiese, ella conservaría vigor para servir de sustento a la procedencia de una apelación en el caso de que se trata;

SEPTIMO: Que un requerimiento de inaplicabilidad que no cumple todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el inciso undécimo del artículo 93 constitucional no puede prosperar, debiendo ser rechazado por dicho motivo y sin que resulte necesario entrar a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión promovida,

VISTO: lo prescrito en el artículo 93, inciso primero N° 6° e inciso undécimo, de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 31 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA QUE SE NIEGA LUGAR AL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1 Y QUE SE PONE TERMINO A LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 112.

Se previene que el Ministro señor Jorge Correa Sutil concurre a lo resuelto teniendo además y especialmente presente que el resultado contrario a la Constitución que se alega deriva de una interpretación jurisprudencial, cual es la no impugnabilidad de la resolución denegatoria de beneficios carcelarios por la vía de la nulidad. Este efecto no se produce por la aplicación del precepto legal impugnado y, por ende, la declaración de inaplicabilidad del mismo no es la vía idónea para evitar el efecto contrario a la Carta Fundamental que se alega.

Redactó la sentencia el Ministro señor Francisco Fernández Fredes y la prevención su autor.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 670-2006.-

Se certifica que el Ministro Señor Mario Fernández Baeza concurrió a la vista y al acuerdo del fallo pero no firma por encontrarse ausente con permiso.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente (S) don Juan Colombo Campbell y los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.